

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 7º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-19180-2019
CARATULADO : FISCO DE CHILE/KABELCO S.A.

Santiago, trece de Diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS,

Al folio 1, comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación legal del **FISCO DE CHILE**, Corporación de Derecho Público, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, Comuna de Santiago, e interpone demanda de cobro de pesos en contra de **KABELCO S.A.**, representada legalmente por don Ricardo Behrens Fuchs, ignora profesión u oficio, domiciliados en calle Santa Adela N° 9460, comuna de Maipú; por la suma de 200 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes al mes de junio de 2019 a la suma de \$9.748.200.-, en virtud de los argumentos que expone.

Señala que por sentencia N° 1909, de fecha 20 de abril de 2012, pronunciada por doña Rosa Oyarce Suazo, Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, se aplicó a Kabelco S.A. una multa de 200 UTM. Agrega que con fecha 25 de julio de 2012, se dictó la Resolución Exenta N° 3794, que suspendió los efectos de la sentencia sanitaria N° 1909, a partir de la fecha de ingreso a distribución en la Corte de Apelaciones de Santiago, de la reclamación judicial iniciada por Kabelco S.A., esto es, desde el 2 de mayo de 2012, y hasta el quinto día hábil desde la notificación de la sentencia de término de la reclamación.

La reclamación Rol C-10719-2012, tramitada ante el 23º Juzgado Civil de Santiago, terminó por sentencia de segunda instancia de fecha 26 de febrero de 2015, que confirmó la sentencia definitiva de primera instancia, de fecha 4 de julio de 2014, que rechazó la demanda de reclamación en todas sus partes. El cúmplase fue dictado con fecha 1 de abril de 2015.

La sentencia sanitaria y la Resolución Exenta que la suspende se encuentran ejecutoriadas, según consta de certificado de fecha 23 de mayo de 2019, emanado de don Gabriel Antivilo Bruna, quien fue designado como Ministro de Fe del Departamento Jurídico de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, según Resolución Exenta N° 486, de 20 de abril de 2016.

De lo anteriormente expuesto, refiere que Kabelco S.A. adeuda al Fisco de Chile la suma de 200 UTM (doscientas unidades tributarias mensuales).

Al folio 5 se tuvo por interpuesta la demanda y se confirió traslado de ella.

Al folio 14, debidamente notificada, la parte demandada contesta la demanda, solicitando su rechazo, toda vez que considera que la acción de cobro de pesos se extinguió por el transcurso del plazo legal, es decir, la estima prescrita, pues las reclamaciones deducidas contra la resolución que aplicó la sanción de multa, no suspenden la ejecución de la misma, y por ende, son plenamente cobrables a su deudor. Y siendo cobrables o ejecutables, refiere que el plazo de prescripción extintiva de la acción de cobro corre en contra de su titular desde que son exigibles.

Agrega que la Seremi de Salud Región Metropolitana, por sí o representada por el Fisco de Chile, no ejerció la acción de cobro de la multa aplicada, desde el día que se notificó la resolución o sentencia administrativa N° 1909, el día 25 de abril de 2012, hasta la fecha de la notificación de la demanda de autos (16 de octubre de 2019), es decir, no la ejerció durante 7 años 5 meses y 21 días.



Foja: 1

Acto seguido explica que la excepción de prescripción opuesta es la de 6 meses, atendido que el artículo 174 del Código Sanitario no contemplaba, ni tampoco en ninguna otra norma legal del Código Sanitario, hasta febrero del año 2014, un plazo específico para ejercer el cobro de la multa, y por ende, tampoco un plazo de prescripción extintiva de la acción de cobro. Por dicha razón, explica que antes del cambio legal, nuestra jurisprudencia judicial, como de la Contraloría General de la República, determinaron en reiterados dictámenes, que siendo la multa aplicada en un sumario administrativo una aplicación del principio de culpabilidad en este tipo de procedimientos administrativos, se interpretaba y concluía que la prescripción estaba regida por los artículos 94 y 97 del Código Penal, por lo que se aplicaba al efecto el plazo de la prescripción de las faltas, esto es, de 6 meses contados desde la sentencia ejecutoriada.

Y en forma subsidiaria, señala como plazo de prescripción la de 5 años de la acción de pago y su acción cobro, agregando que se desprende de los propios dichos de la demandante que la acción ejecutiva se encuentra prescrita, por eso la salvedad de extenderla dos años más como acción ordinaria e intentar su cobro.

Al folio 19 se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales debió rendirse la correspondiente probanza por las partes, interlocutoria que fue objeto de reposición por la actora, recurso que fuera rechazado por el Tribunal

Finalmente, al folio 37 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que a folio 1 comparece el Fisco de Chile e interpone demanda de cobro de pesos por la suma de 200 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes al mes de junio de 2019 a \$9.748.200.-, en contra de KABELCO S.A. por los argumentos de hecho y derecho debidamente detallados en la expositiva de esta sentencia, y se dan por íntegramente reproducidos.

Segundo: Que contestando la demanda, la parte demandada opone la excepción de prescripción, de 6 meses según la normativa penal que invoca; y en forma subsidiaria, la de largo tiempo u ordinaria, de 5 años.

Tercero: Que a fin de acreditar la efectividad de sus dichos, la apoderada del Fisco de Chile acompañó al proceso la siguiente documental, inobjetada de contrario:

1.- Sentencia N° 1909, de fecha 20 de abril de 2012. 2.- Resolución Exenta N° 3794, de fecha 24 de julio de 2013. 3.- Sentencia de fecha 4 de julio de 2014, del 23° Juzgado Civil de Santiago. 4.- Sentencia de fecha 26 de febrero de 2015, de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago. 5.- Resolución de fecha 1 de abril de 2015, del 23° Juzgado Civil de Santiago, que dictó el cúmplase de la sentencia de segunda instancia. 6.- Certificado de ejecutoriedad de fecha 23 de mayo de 2019, del Ministro de fe de la SEREMI de Salud RM. 7.- Resolución Exenta N° 486, de fecha 20 de abril de 2016, de la Secretaría Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

Cuarto: Que por su lado el demandado, no allegó probanza alguna en defensa de sus alegaciones.

Quinto: Que, para una adecuada resolución de la controversia de estos autos, cabe precisar lo dispuesto en el actual inciso segundo del artículo 174 del Código Sanitario, el cual refiere que *“Las resoluciones que establezcan las infracciones y determinen las multas tendrán mérito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.”*

Por su lado, el artículo 2514 del Código Civil prescribe que la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, que se computará desde que la obligación se haya hecho exigible. A su vez, el artículo 2515 del mismo cuerpo legal dispone que *“Este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias.”* Finalmente, conforme lo dispuesto por el artículo 2518 del ya citado cuerpo legal, la prescripción se interrumpe civilmente por la demanda judicial.



Foja: 1

Sexto: Que en el caso de autos, debe también considerarse lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 3794 de fecha 25 de julio del año 2012, en la que la autoridad sanitaria dispuso en el expediente del Sumario Sanitario 2424-2011: *"Suspéndese..., a partir de la fecha de ingreso a distribución en la Corte de Apelaciones de Santiago de la reclamación judicial señalada, esto es el 02 de mayo del año 2012, y hasta quinto día hábil, contado desde la ejecutoria de la sentencia de término del recurso de reclamación interpuesto por la sumariada..."*

Asimismo, el artículo 3° inciso final de la Ley 19.880, aplicable al sumario sanitario por su carácter supletorio de acuerdo a su artículo 1° inciso primero, señala expresamente que *"Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediere una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional."*

Séptimo: Que así las cosas, habiéndose dictado el cúmplase al Fallo de Segunda Instancia (Sentencia de término) en la respectiva reclamación sanitaria con fecha 1 de abril de 2015, ingresándose la presente demanda con fecha 11 de abril de 2019 y notificado al demandado con fecha *16 de octubre de 2019*, es lo cierto que no ha transcurrido el término de cinco años del estatuto en cuestión, razón por la que la excepción de prescripción será desestimada.

A mayor abundamiento, lo anteriormente razonado se encuentra en consonancia con el dictamen N° 098032, de 12 de diciembre de 2015, emanado de la Contraloría General de la República, el que resulta aplicable en la especie, por tratarse de una resolución sanitaria ejecutoriada con posterioridad a la publicación de la ley 20.724, en relación a los plazos de prescripción analizados.

Octavo: Que, finalmente, y con el fin de no dejar en suspenso la otra argumentación de la demandada respecto de la aplicación de las normas del Código Penal que regulan la prescripción de la acción fiscalizadora al procedimiento administrativo sancionador, si bien la potestad sancionadora de la Administración forma parte del denominado ius puniendi del Estado, no es menos cierto que la sanción administrativa es independiente de la sanción penal, por lo que debe hacerse una aplicación matizada de los principios del Derecho Penal en materia de sanción administrativa, excluyéndose para estos efectos la regulación de los artículos 94 y 95 del Código Penal, aplicándose las normas del artículo 2515 del Código Civil, como se dijera en los considerandos precedentes.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1545, 1546, 1698, 1700, 1702, 1706 y demás pertinentes del Código Civil, y artículos 138, 144, 160, 170, 254, 342, 346, 428, 748 y siguientes y demás pertinentes del Código de Procedimiento Civil, *se declara:*

I.- Que **se acoge la demanda de lo principal** de folio 1 y, en consecuencia, se condena al demandado al pago de 200 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes al mes de junio de 2019 a la suma de \$9.748.200.-, más intereses.

II.- Que se condena en costas al demandado.

III.- Que el señor Secretario del Tribunal practicará las liquidaciones que correspondan.

Regístrese y notifíquese.

Dictada por doña Lidia Patricia Hevia Larenas, Jueza Suplente.



C-19180-2019

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, trece de Diciembre de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BVGXXCYPTBT